H. TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

MARITZA DEYANIRA BASURTO BASURTO, en mi calidad de diputada de Movimiento Ciudadano, integrante de la XVII Legislatura del Estado de Quintana Roo, personalidad que tengo debidamente acreditada y reconocida en el presente expediente: JDC/031/2022, con el debido respeto, comparezco para exponer:

Que con fundamento en el numeral inciso c) del artículo 3, 9, 79 y 80 Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y por mi propio derecho, vengo a promover Juicio para la Protección de los Derechos Políticos del Ciudadano, en contra de la Sentencia del Tribunal Electoral de Quintana Roo de fecha veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, recaída en el expediente JDC/031/2022.

Por lo anteriormente expuesto fundado, atentamente le solicito se sirva:

Único: tenerme por presentado mediante el presente medio de impugnación y el anexo señalado, a la autoridad correspondiente tal y como lo marca la legislación aplicable para su debida substanciación ante la Superioridad.

Chetumal, Quintana Roo a 29 de noviembre de 2022.

PROTESTO LO NECESARIO

MARITZA DEYANIRA BASURTO BASURTO

Marisol Pitol.

Tribunal Electoral de Quintana Roo

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES

ACTOR: DIPUTADA MARITZA DEYANIRA BASURTO BASURTO.

ACTO IMPUGNADO: RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ELECTORAL RECAIDA EN EL EXPEDIENTE JDC/031/2022.

SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL

DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

MAGISTRADOS

PRESENTES.

La suscrita Maritza Deyanira Basurto Basurto, promoviendo en mi calidad de Diputada de Movimiento Ciudadano, integrante de la H. "XVII" Legislatura del Estado de Quintana Roo, personalidad que tengo debidamente reconocida y acreditada en el referido asunto, además de ser un hecho público y notorio; señalando como domicilio a efecto de recibir notificaciones, el ubicado en calle Esmeralda # 102, colonia Barrio Bravo, en Chetumal Quintana Roo, con número celular 9871380504 y/o 9831860581, con correo electrónico dip.maritza.basurto@congresoqroo.gob.mx y/o rafaelriveroaburto@gmail.com autorizando para los mismos efectos a los C. C. C. Maritza Deyanira Basurto Basurto y Rafael Alejandro Rivero Aburto, ante ustedes con el debido respeto comparezco para exponer:

Que con fundamento en el numeral inciso c) del artículo 3, 9, 79 y 80 Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y por mi propio derecho vengo a promover juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano en contra de la Sentencia del Tribunal Electoral de Quintana Roo, recaída en el expediente JDC/031/2022, de fecha 23 de noviembre de 2022.

Para dar cumplimiento a los requisitos procesales exigidos por el artículo 9, 79 y 80 Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, manifiesto lo siguiente:

a) Hacer constar el nombre del actor: Ha queda expresado en el proemio del presente escrito.

b) Señalar domicilio para recibir notificaciones y, en su caso, a quien en su nombre las pueda oír y recibir: Se menciona en el proemio de este escrito.

c) Acompañar el o los documentos que sean necesarios para acreditar la personería del promovente: Promuevo por mi propio derecho y con la personalidad reconocida como ciudadana y diputada de la XVII Legislatura.

d) Identificar el acto o resolución impugnado y al responsable del mismo: la Sentencia recaída en el expediente JDC/031/2022, de fecha 23 de noviembre de 2022 emitida por el Tribunal Electoral de Quintana Roo.

e) Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la impugnación: los agravios que cause el acto o resolución impugnado, los preceptos presuntamente violados y, en su caso, las razones por las que se solicite la no aplicación de leyes sobre la materia electoral por estimarlas contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Se expresarán en el capítulo correspondiente.

f) Ofrecer y aportar las pruebas dentro de los plazos para la interposición o presentación de los medios de impugnación previstos en la presente ley; mencionar, en su caso, las que se habrán de aportar dentro de dichos plazos; y las que deban requerirse, cuando el promovente justifique que oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente, y éstas no le hubieren sido entregadas; y se expresarán en el capítulo correspondiente.

g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente Este requisito se satisface a la vista.

HECHOS

1. El día siete de enero del año dos mil veintidós, el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, declaró el inicio formal del Proceso Electoral Local 2021-2022, para

las elecciones ordinarias de Diputadas y Diputados a la XVII Legislatura, así como para renovar al titular del poder ejecutivo.

2. El día cinco de junio de dos mil veintidós, se llevó a cabo la jornada electoral en todos los Distritos Locales de Quintana Roo, a efecto de que el electorado hiciera uso de sus derechos político - electorales y emitieran su sufragio favoreciendo a la fuerza política o Candidatos de su preferencia.

3. En fecha doce de junio de dos mil veintidós, el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, celebró la Sesión de Cómputo, Declaración de Validez de la Elección y Asignación de Diputaciones por el Principio de Representación Proporcional a la H. XVII Legislatura de Quintana Roo, entregándoseme en dicha sesión mi constancia de asignación como diputada de Movimiento Ciudadano.

4. Es así que en fecha tres de septiembre de dos mil veintidós, tome protesta como diputada integrante de la H. XVII Legislatura de Quintana Roo e inicié formalmente mis funciones como tal.

5. En fecha veintiséis de octubre de dos mil veintidós, llevamos a cabo la sesión número 20 del primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio Constitucional de la H. XVII Legislatura de Quintana Roo, y dentro del orden del día de la sesión, venía incluido en el punto número cinco (5), siendo este la "lectura de la minuta de proyecto de decreto, por el cual se reforma el artículo quinto transitorio del decreto en el que se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de guardia nacional, publicado en el diario oficial de la federación el 26 de marzo de 2019, remitida por la cámara de diputados del Honorable congreso de la unión, publicada en la gaceta parlamentaria año uno número uno extraordinario de fecha 20 de octubre del 2022", para su discusión y aprobación en su caso; y fue durante dicha sesión que al llegar al desahogo de dicho punto de la orden del día, me apunté como oradora en el debate del mismo, y cuando tocó mi turno para debatir, la presidenta de la mesa directiva, la diputada Mildred Concepción Ávila Vera, me preguntó que si era para hablar a favor o en contra de la propuesta, a lo que le respondí que era en contra, y fue así que me dijo que no me permitiría participar, pues la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Quintana Roo, en su artículo 155, decía que se debería hablar a favor o en contra de la propuesta, y como ya había una intervención en contra, que ahora debería ser una intervención a favor para que existiera debate, y como era en contra, no se me otorgaba el uso de la voz, negándose el uso de la voz y con ello, el pleno ejercicio del ejercicio de mi encargo.

6. Que en fecha veintiocho de octubre de dos mil veintidós, la suscrita presente el Juicio de Protección de Derechos Políticos electorales del Ciudadano Quintanarroense ante la Mesa Directiva de la XVII Legislatura de Quintana Roo.

7. Que en fecha tres de noviembre de dos mil veintidós, el Tribunal Electoral de Quintana Roo, emitió la sentencia del expediente JDC/031/2022, el cual resolvió desechar de plano el juicio promovido.

INTERÉS JURIDICO

Que la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral en los incisos b) y c) del artículo 10, contiene como causales de improcedencia de los medios de impugnación que no afecten el interés jurídico del actor y que el promovente carezca de legitimación

Interpretado dicho numeral a contrario sensu, se concluye que para la promoción del juicio se requiere tener interés legítimo y jurídico en el asunto o los hechos planteados en la demanda.

El interés jurídico supone la existencia de un derecho dentro de la esfera jurídica particular de un individuo (derecho subjetivo), es decir, que se encuentra dentro de su status jurídico;

Este derecho implica que incluso cuando existe un interés jurídico o legítimo, en tanto que es jurídicamente relevante y por eso digno de protección, debe ser plenamente justiciable. De tal forma que el derecho de acceso a la justicia solo desaparece si no existe un interés mínimamente individualizado.

En este sentido, debe considerarse que el derecho de acceso a la justicia significa que ningún acto de autoridad puede salvarse de ser revisado por las autoridades jurisdiccionales y que el Estado tiene la obligación de aplicar las leyes sobre todo las procesales de la manera más

favorable posible para la efectiva iniciación del proceso evitando formalismos, a lo que se conoce como principio pro actione.

AGRAVIOS Y PRECEPTOS VIOLADOS

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN: La determinación del Tribunal Electoral del Estado de Quintana roo, me deja en estado de indefensión al no asumir su papel como tribunal en la materia sin ejercer control de constitucionalidad para hacer valer mi derecho a ejercer el cargo para el cual fui electa, ya que el tribunal responsable desecha mi demanda bajo el erróneo contexto de considerar mis alegaciones en la demanda inicial como de procedimiento legislativo, lo cual no acontece puesto que al tribunal referido no se le solicita califique de modo alguno el derecho parlamentario o la interpretación errónea de la mesa directiva, por el contrario lo que se solicita al tribunal, es que se asuma en su papel de control constitucional en defensa de los derechos PRO HOMINE y que haga valer mi derecho a ejercer el cargo para el cual fui electa como diputada del Estado de Quintana Roo de manifestarme y de no coartar mi derecho no solo al ejercicio de mi encargo si no a la libre manifestación de mis ideas, para poder garantizar el debate parlamentario.

Lo erróneo de la responsable es considerar que no tiene competencia material para conocer, sin hacer un análisis de todos los agravios planteados a su estudio, considerando que en mi planteamiento inicial citaba los artículos de la Ley orgánica del Poder Legislativo de Quintana Roo, esto fue únicamente para referir que no había razón para negarme el derecho de ejercer las funciones de representación de la ciudadanía la cual me eligió en las pasadas elecciones, debe resaltarse que el ejercicio del derecho político electoral a ser votado cuenta con dos dimensiones, el derecho a ser votado y el DERECHO A EJERCER EL CARGO SIN RESTRICCIONES más que las legalmente establecidas en la ley y en el caso, como se comprobó de la lectura de la demanda primigenia en la que se plantearon de manera enunciativa los artículos referidos al debate parlamentario, sin embargo, debe considerarse que en el caso, no se está solicitando el pronunciamiento sobre la legalidad del debate sino del impedimento de ejercer las funciones que tengo a mi cargo como legisladora al seno del congreso del estado, es una atribución de los diputados manifestar libremente sus ideas, y que las mismas sean escuchadas; los debates forman parte del ejercicio democrático, y en este caso, al haberme impedido el uso de la voz se violenta en mi contra ese derecho, por lo que el tribunal responsable si es competente de conocer sobre el caso planteado.

Las y los diputados al ser electos al asumir y ejercer el cargo, tenemos obligaciones tal y como se encuentran establecidas en el artículo 60 de la Constitución Política del estado libre y soberano de Quintana Roo y el artículo 40 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado de Quintana Roo, asistir a las sesiones las cuales se encuentran previstas en la sección segunda denominada de las sesiones, en donde el presidente de la mesa directiva dentro de sus atribuciones establecida en su fracción IV del artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, conducirá los debates y las liberaciones del pleno, por lo que los diputados podrán hacer uso de la voz a favor o en contra en tribuna o desde su curul, en el orden en que solicitaron su intervención, cuando se someta a debate Iniciativa de Ley o Decreto de conformidad con lo establecido en el artículo 155 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, es importante tener en consideración que los debates también se encuentran regulados en el Capítulo VII del Reglamento para el gobierno interior de la Legislatura del Estado de Quintana Roo, en el artículo 56 en donde el Presidente preguntará a los diputados si desean tomar la palabra y hará una lista de los individuos que la pidan para hablar en contra y en pro, en relación con el articulo 58 del referido reglamento en el cual los diputados hablarán alternativamente en contra o en pro, llamándolos el Presidente por el orden de las listas, comenzando por el inscrito en contra.

Cabe mencionar que en momento alguno se ha llevado a cabo la sesión bajo un orden a favor o en contra en el poder legislativo, adicionalmente a que en nuestra propia legislación se establece el derecho de los diputados de manifestarnos, por lo que negar la participación de una servidora en una sesión pública en la que se debatía una iniciativa que se pondría a consideración de manera urgente, hace necesario el debate parlamentario máxime el posicionamiento de una servidora para hacer de conocimiento público las razones del porque votaría en contra, sin embargo se me niega ese derecho a informar a la ciudadanía y no solo se me niega ese derecho ahora se me niega, la posibilidad de que estos actos no vuelvan a acontecer toda vez que esta situación puede seguir aconteciendo en otras ocasiones negándoseme la posibilidad de ejercer de manera correcta mi encargo.

Toda vez que en el Congreso del Estado de Quintana Roo, no cuenta con normatividad alguna en la se establezca el medio por cual pueda reclamar la violación al no permitirme realizar el ejercicio de mis funciones inherentes a mi cargo como lo fue participar en el debate de la sesión número 20 del primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio Constitucional de la H. XVII Legislatura de Quintana Roo, motivo por el cual acudí a la autoridad responsable para se me protegieran mis derechos políticos electorales por lo que la naturaleza y tutela de esta dimensión está comprendida en la materia electoral.

Argumento que se sustenta con la Jurisprudencia 2/2022

Nancy de la Sierra Arámburo y otros

vs.

Junta de Coordinación Política del Senado de la República

ACTOS PARLAMENTARIOS. SON REVISABLES EN SEDE JURISDICCIONAL ELECTORAL, CUANDO VULNERAN EL DERECHO HUMANO DE ÍNDOLE POLÍTICO-ELECTORAL DE SER VOTADO, EN SU VERTIENTE DE EJERCICIO EFECTIVO DEL CARGO Y DE REPRESENTACIÓN DE LA CIUDADANÍA.

Hechos: Legisladoras y legisladores promovieron diversos medios de impugnación electorales para controvertir actos y omisiones que atribuyeron a las Juntas de Coordinación Política de las dos Cámaras del Congreso de la Unión y de un Congreso local, por considerar que se vulneró su derecho político-electoral a ser votados, en su vertiente de ejercicio efectivo del cargo, en virtud de que, en algunos casos, no se les permitió integrar las Comisiones Permanentes; y, en otro, no hubo pronunciamiento sobre la solicitud de conformar un grupo parlamentario.

Criterio jurídico: Los tribunales electorales tienen competencia material para conocer y resolver los medios de impugnación promovidos en contra de actos o decisiones que afecten el núcleo de la función representativa parlamentaria, en donde exista una vulneración al derecho político-electoral a ser electo, en su vertiente de ejercicio efectivo del cargo.

Justificación: Este criterio surge como una evolución de las jurisprudencias 34/2013, de rubro DERECHO POLÍTICO-ELECTORAL DE SER VOTADO. SU TUTELA EXCLUYE LOS ACTOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTES AL DERECHO PARLAMENTARIO y 44/2014, de rubro COMISIONES LEGISLATIVAS. SU INTEGRACIÓN SE REGULA POR EL DERECHO PARLAMENTARIO; ya que, a partir de una interpretación sistemática y progresiva de los artículos 1º, 17, 41, Base VI, y 116, fracción IV, inciso l), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 8, 23 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, considerando la jurisprudencia 19/2010, de rubro COMPETENCIA. CORRESPONDE A LA SALA SUPERIOR CONOCER DEL JUICIO POR VIOLACIONES AL DERECHO DE SER VOTADO, EN SU VERTIENTE DE ACCESO Y DESEMPEÑO DEL CARGO DE ELECCIÓN POPULAR; se reconoce que existen actos meramente políticos y de organización interna de un órgano legislativo que forman parte del derecho parlamentario. Sin embargo, también existen actos jurídicos de naturaleza electoral que inciden en los derechos político-electorales, como en la vertiente del ejercicio efectivo del cargo, los cuales pueden ser de conocimiento del Tribunal Electoral. Específicamente, el derecho político-electoral a ser

electo, en su vertiente del ejercicio efectivo del cargo, implica que cada legisladora o legislador pueda asociarse y formar parte en la deliberación de las decisiones fundamentales y en los trabajos propios de la función legislativa. Por tanto, el derecho a ser votado no se agota con el proceso electivo, pues también comprende permanecer en él y ejercer las funciones que le son inherentes, por lo que la naturaleza y tutela de esta dimensión está comprendida en la materia electoral. De esta manera, atendiendo al deber de garantizar el derecho a una tutela judicial efectiva, las autoridades jurisdiccionales electorales deben conocer de los planteamientos relacionados con la vulneración de esta dimensión del derecho a ser votado y la naturaleza propia de la representación, por determinaciones eminentemente jurídicas adoptadas en el ámbito parlamentario.

Debe considerarse que constituye una actuación indebida el que me negaran el derecho de manifestarme, esto es así, pues parte de la naturaleza de un órgano colegiado estriba en la diversidad de opiniones e incluso en el disenso respecto del sentido o consideraciones que sustentan una determinación del órgano colegiado, sin que sea viable admitir que las opiniones que cada uno de sus integrantes expresan puedan ser objeto de censura o autorización de sus pares, pues esto constituiría una transgresión a la libertad y autonomía de que gozan los integrantes de un órgano colegiado.

Asimismo debe considerarse que exhaustividad de la responsable, toda vez que la autoridad responsable no entro al estudio del agravio ya que la suscrita pertenece a una minoría por ser del Partido Movimiento Ciudadano, siendo la única diputada emanada del partido político referido, la cual ejerce el cargo en la XVII Legislatura de Quintana Roo. En el entendido que la actora en mi carácter de diputada local, cuento con mis derechos específicos reconocidos en la legislación y los que garantizan que este en condiciones de ejercer mi cargo.

En consecuencia, se solicita que este tribunal considere que fue erronea la interpretación realizada por la responsable en considerar que se trata de temas parlamentarios lo planteado, sin analizar que en el caso se esta ante la restricción del derecho político a ser votado en su vertiente de ejercicio del cargo para el que fui electa, por lo que debio la responsable analizar los actos puestos a su consideración, por lo que solicito que se revoque la resolución emitida por la responsable y se ordene al Tribunal Electoral Local entre al estudio de los agravios planteados y resuelva sobre los actos que violentaron mis derechos político electorales.

PRUEBAS

I. **DOCUMENTAL PÚBLICA:** Consistente en la resolución de fecha juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano en contra de la Sentencia del Tribunal Electoral de Quintana Roo, recaída en el expediente JDC/031/2022, de fecha 23 de noviembre de 2022.

II. **DOCUMENTAL PRIVADA:** Consistente en copia simple de la credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral.

III. **INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.** Consistente en todas y cada una de las derivadas de la instrumentación y sustanciación de las diligencias y actos en el presente juicio que causen convicción al ente político que represento.

IV. **PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA**. Entendiendo a éstas de todas aquellas que derivadas de las convicciones que genere el juzgador que resulten de las actuaciones tanto legales como humanas y que causen convicción a favor de mi candidatura.

Por lo hasta aquí expuesto, respetuosamente solicito:

PRIMERO. Tener por presentada en tiempo y forma el presente escrito, así como declarar procedente el juicio que se intenta promover.

SEGUNDO. Ordenar al Tribunal Electoral de Quintana Roo, se pronuncie sobre el juicio por tratarse de una cuestión relativa al derecho a ejercer el cargo para el cual resulte electa.

Chetumal, Quintana Roo a 29 de noviembre de 2022.

MARITZA DEYANIRA BASURTO BASURTO